

1

Seguridad social y educación:

Una mirada hacia y desde las juventudes frente al proceso electoral costarricense de 2022



FLACSO
COSTA RICA



Comité Directivo del proyecto

José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente
Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD).
Ilka Treminio Sánchez, Directora
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Costa Rica

Equipo de trabajo FLACSO – Sede Académica Costa Rica

Karla Salazar Sánchez – Investigadora coordinadora, FLACSO CR
Cathalina García Santamaría – Investigadora, FLACSO CR
Magdalena Madrigal Herrera – Investigadora, FLACSO CR
Mauricio Sandoval Cordero – Investigador, FLACSO CR

Equipo de proyecto Construyendo una Ruta Común al 2030

Randall Brenes Suárez, Oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad Democrática
Gerald Mora Muñoz, Coordinador de Proyecto
Charleene Cortez Sosa, Especialista en Gestión de Conocimiento

Diseño y diagramación

Sofía Arce Ureña, Directora Creativa, NEWTON
Napoleón Retana Rodríguez, Diseñador editorial, NEWTON

Comité editorial del PNUD

Kryssia Brade Jiménez, Representante Residente Auxiliar
José Daniel Estrada, Especialista en Monitoreo y Evaluación
Rafaella Sánchez Mora, Especialista en Género
Tatiana López Gianolli, Especialista en Comunicación
Charleene Cortez Sosa, Especialista en Gestión de Conocimiento

Está autorizada la reproducción total o parcial de esta publicación con propósitos educativos y sin fines de lucro, sin ningún permiso especial del titular de los derechos, con la condición de que se indique la fuente. PNUD-Costa Rica agradecerá que se remita un ejemplar de cualquier texto elaborado con base en la presente publicación.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa Rica,
Teléfono: (506) 22961544
<http://www.pnud.or.cr> -Email: registry@undp.org

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Trabajamos con nuestra extensa red de expertos y aliados en 170 países para ayudar a las naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta. Pueden obtener más información en undp.org o seguirnos en [@PNUD](https://twitter.com/PNUD).

Índice

Introducción	5
<hr/>	
Metodología	6
<hr/>	
Seguridad social y educación: una mirada hacia y desde las juventudes	7
<hr/>	
Salud	8
<hr/>	
Educación	11
<hr/>	
No es una, sino muchas juventudes: la persistencia de brechas territoriales y de género como reto para la inclusión de las poblaciones jóvenes	15
<hr/>	
Recomendaciones	17
<hr/>	
Referencias	20



Seguridad social y educación: una mirada hacia y desde las juventudes frente al proceso electoral costarricense de 2022

Introducción

El proyecto “Construyendo una ruta común hacia el 2030”, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD), se planteó como objetivo promover el posicionamiento, discusión y construcción de propuestas de temas claves para el desarrollo nacional, especialmente en el marco de la recuperación de los efectos socioeconómicos de la crisis, con miras a retomar la ruta y acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. En este marco, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Académica Costa Rica, en calidad de socio estratégico, desarrolló el estudio “Cultura política de las personas jóvenes frente al proceso electoral costarricense de 2022: orientaciones hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás”.

Dicha investigación se propuso como fin generar orientaciones y recursos para mejorar el debate político y promover el diálogo democrático, informado, inclusivo, con información disponible y asequible, concerniente a las personas jóvenes, respecto al proceso electoral costarricense de 2022 y que tuviese como centro la reflexión hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Para alcanzar dicho objetivo, la investigación buscó comprender cómo las personas jóvenes conciben la democracia, ejercen la ciudadanía y expresan valores sociopolíticos a través del involucramiento o no en la vida política costarricense, específicamente en el posicionamiento, discusión y construcción de propuestas en torno a temáticas nacionales que las afectan directamente, es por esto que la reflexión se dio en torno a tres ejes temáticos, a saber: seguridad social y educación, crecimiento económico y empleo, y economía verde.

Producto del estudio surge esta serie de Cuadernos, en los cuales se aborda cada una de las temáticas mencionadas, sin desconocer las interrelaciones que se dan entre cada una de ellas. Este cuaderno en específico retoma de manera sintética el eje analítico “1. Seguridad social y educación”. Para una visión más amplia, se invita a la lectura de los cuadernos “2. Crecimiento económico y empleo”, y “3. Economía verde”, por otra parte, en el informe completo de la investigación, disponible en el sitio web www.ruta2030.cr, se profundiza cada uno de los ejes.

La estrategia metodológica utilizada para el estudio fue mixta (cuantitativa y cualitativa), lo que permitió tratar los tres ejes temáticos desde la perspectiva de personas jóvenes, transversalizando el análisis de acuerdo con las percepciones de brechas de género y territorio que sufren las juventudes. Este análisis resulta fundamental para abrir espacios de discusión, en un contexto en el cual se acerca al proceso electoral a nivel nacional y en el que, ante la perspectiva adultocentrista, las personas jóvenes suelen verse menospreciadas, a pesar del peso que pueden tener en los resultados electorales. Adicionalmente, es importante considerar que, como generación, las personas jóvenes expresan una mayor desconfianza en las instituciones y en los mecanismos de representación, una menor simpatía por los partidos políticos y una menor participación electoral respecto a otros grupos etarios, salvo en el caso de las personas que votan por primera vez (Treminio y Pignataro, 2019).

Es por esta razón, que se considera que escuchar y atender las problemáticas, que viven las y los jóvenes, es el mejor ejercicio democrático contra la desafección política en esta población, lo cual debe ir de la mano del fomento de la participación ciudadana de las juventudes a través de diversas formas, medios y espacios de participación (lo cual contempla los digitales y virtuales), así como en organizaciones tradicionales como los partidos políticos y en organizaciones no tradicionales como las acciones colectivas y nuevos movimientos sociales, entre los que sobresalen los movimientos feministas contemporáneos y el activismo ecológico.

Metodología

En el presente estudio se utilizó una metodología mixta, de modo que se recopiló y analizó información cualitativa y cuantitativa de forma simultánea. Este abordaje permitió poner a dialogar datos estadísticos con percepciones de diversas personas jóvenes, a la vez que facilitó profundizar el análisis a partir de experiencias y relatos de las personas participantes.

En este sentido, para definir el contexto en el que viven las personas jóvenes en Costa Rica, se tomó en consideración una serie de estadísticas en relación con los ejes temáticos de protección social, crecimiento económico, empleo y fragilidad fiscal, así como economía verde y soluciones basadas en la naturaleza. Con este fin, se utilizaron bases de datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) correspondientes a noviembre de 2020 y abril de 2021; además de las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018; y de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2014, 2018 y 2020; al igual que la Encuesta Nacional de Cambio Climático de 2020 del PNUD y la Dirección de Cambio Climático (DCC).

Por otro lado, con el objetivo de captar las percepciones de la población joven respecto a los ejes temáticos del estudio se realizaron 8 grupos focales en modalidad virtual en los meses de julio y agosto de 2021. En estos espacios participaron voluntariamente personas de 18 a 35 años, con acceso a un dispositivo electrónico y conexión a internet. Las y los jóvenes participantes forman parte de partidos políticos, organizaciones activistas por los derechos humanos en diferentes ramas (feministas, ambientalistas, etc.) y otras organizaciones políticas de naturaleza diversa como algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL), el Consejo de la Persona Joven (CPJ), entre otras; así como de organizaciones religiosas, deportivas y artísticas.

También se realizó un grupo focal con mujeres jóvenes, otro con personas jóvenes que residen en comunidades caracterizadas por condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y uno con personas jóvenes que no participan de ninguna organización y que manifiestan no tener interés en la política. Por último, participaron representantes de instituciones estatales con programas vinculados a los ejes temáticos y población joven como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Viceministerio de Juventud, el Viceministerio de Paz, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

En total, se contó con la participación de 61 personas, divididas en 30 mujeres y 31 hombres. Cabe recalcar que se implementó la guía de los grupos focales de manera flexible, se tomó en cuenta el tiempo y el nivel de profundización al que llegaban los grupos en los distintos ejes temáticos. Para el procesamiento y análisis de la información, se transcribieron los grupos focales y se elaboró un libro de códigos y categorías analíticas, finalmente el procesamiento se realizó en el programa de análisis cualitativo Atlas.ti.

Seguridad social y educación: una mirada hacia y desde las juventudes

La seguridad social ha sido un tema presente a lo largo de la historia costarricense, donde la aprobación en 1941 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se reconoce como uno de los eventos decisivos en materia de seguridad social en el país. El imaginario social que se ha construido desde ese momento en torno a la CCSS como la materialización de la legislación en materia de seguridad social, ha estado presente en el desarrollo de la ciudadanía costarricense, de esto no escapa la población joven del país en la actualidad. Al consultarles a las y los jóvenes que participaron como informantes en este proyecto sobre protección social, homologan el concepto con seguridad social. De manera generalizada al consultarles sobre protección social, se refirieron a temas que giran en torno a la salud y políticas públicas, afirman que hablar de protección se refiere a garantizar el acceso a salud y empleo para diferentes grupos y poblaciones, pero no mencionan aspectos como pensiones, régimen no contributivo, programas de transferencias condicionadas y no condicionadas, entre otras acciones propias de la protección social. Por tanto, estas perspectivas dan cuenta de un desconocimiento por parte de estas personas jóvenes de los alcances que tiene el sistema de protección social en el país, donde la seguridad social es uno de sus componentes, pero no el único y se entiende de forma equivalente la seguridad social y la protección social.

Un aspecto por resaltar es que, dentro del imaginario de estas personas jóvenes hay un reconocimiento sobre la existencia y presencia de la institucionalidad pública en materia de salud, sin embargo, la presencia no implica garantía en el acceso y la calidad de los servicios. Valoran que las condiciones actuales en esta área resultan insuficientes para cubrir las necesidades según territorios y grupos poblacionales, son ellas y ellos un grupo que enfrenta dificultades, que a su vez propician y reproducen desigualdades. Además, evalúan la seguridad social de dos formas. Por un lado, reconocen las acciones que realizan las instituciones públicas. Por otro, reconocen que requieren más alcance y calidad. Sin embargo, es destacable que no se asocia a una noción de abandono por parte del Estado.

A continuación, se desagrega la información obtenida según dos ejes temáticos: salud y educación. Además, se contrastan las subjetividades de las personas jóvenes consultadas con estadísticas a nivel nacional y las valoraciones que tienen representantes de instituciones públicas en el país.

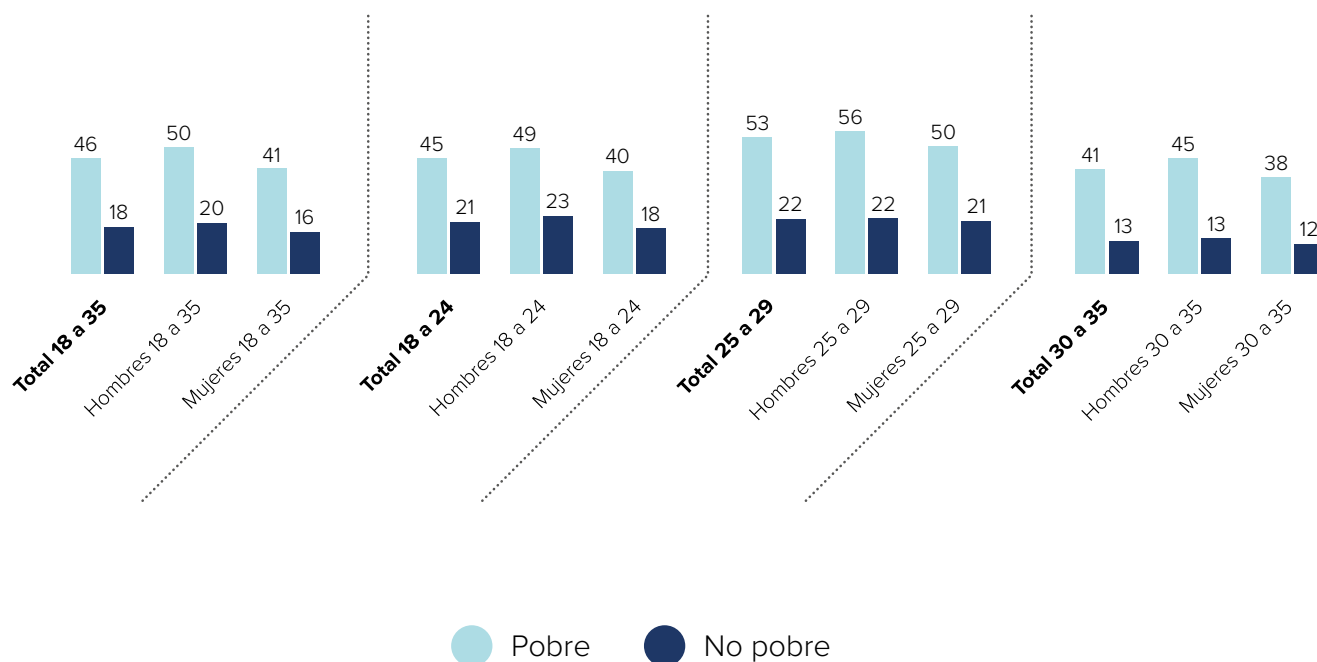
Salud

El eje de salud se abordó desde tres líneas temáticas: el acceso, el enfoque predominante para el abordaje de la salud y los ámbitos de salud que priorizan. De manera generalizada consideran que el acceso es particularmente difícil para la población joven entre 18-35 años, ya que la condición de aseguramiento depende de estar insertos en el sistema educativo o en el mercado laboral formal. Ante este escenario afirman sentirse en un limbo, pues acceder a empleo no es sencillo en el país y continuar con el estudio tampoco, dado que entran en juego factores de tipo económicos y/o sociales que representan obstáculos en la transición entre la educación y el mercado laboral.

Cuando se comparan las opiniones con las estadísticas a nivel nacional, se encuentra que la preocupación que externan las y los jóvenes es una realidad que se agudiza para quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad económica en el país. Según datos de la Enaho, para el año 2020, alrededor del 46% de las personas jóvenes (18 a 35 años) que se encontraban en pobreza no estaban aseguradas (Gráfico 1). Esto representa un obstáculo para esta población ya que no cuentan con acceso a la salud pública ni con los medios económicos para costearse atención médica privada.

Cabe mencionar, que si bien, la pandemia afectó las cifras de pobreza en el país, donde la población joven no fue la excepción, la condición de aseguramiento no experimentó cambios. Cuando se comparan los datos de la Enaho 2019 con 2020 el porcentaje de personas jóvenes en condición de pobreza pasó de 33% a 38% respectivamente, pero la cifra de personas jóvenes sin seguro se mantuvo en 46% para ambos años (Enaho, 2019, 2020).

Gráfico 1. Porcentaje de población de 18 a 35 años no asegurada según sexo y grupo de edad por condición de pobreza. 2020



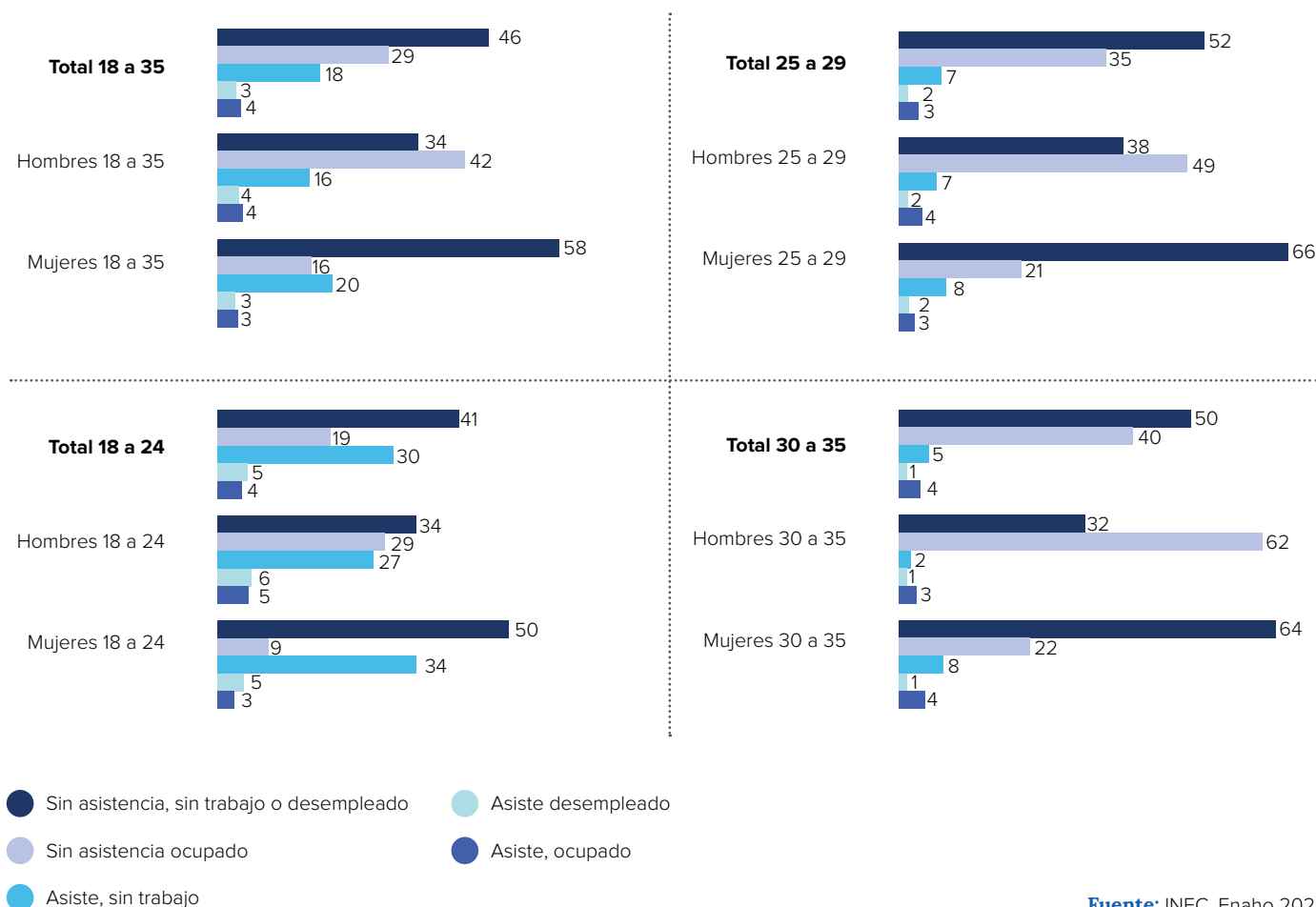
Fuente: INEC, Enaho 2020.

Otro dato que se considera en línea con las inquietudes de las y los jóvenes en materia de aseguramiento, es que el 46% de dicha población, que se encuentra en condición de pobreza, no asiste a la educación formal ni cuenta con empleo. Esta cifra aumenta en el grupo de jóvenes de 25 a 29 años y en el de 30-35, con porcentajes de 52 y 50 respectivamente (Gráfico 2). Son estos dos últimos grupos los que quedan fuera de la posibilidad de ser asegurados por sus madres o padres. Además, es claro que son más las mujeres que no asisten a educación formal ni tienen participación en el mercado laboral remunerado, en contraste con los hombres.

También en materia de acceso, las personas que participaron señalaron que quienes han logrado saltar la barrera del aseguramiento, luego pueden encontrar brechas territoriales. Enfatizaron que hay diferencias en la calidad de la infraestructura, las especialidades médicas disponibles, la cantidad de pacientes que se puede atender y las distancias que se deben recorrer para acceder a los centros de salud.

Otro aspecto clave es la valoración que hacen las personas consultadas sobre la prioridad que establecen los servicios de salud para algunos grupos de población específicos. En 2 de los espacios de consulta, contrastaron la priorización

Gráfico 2. Porcentaje de población de 18 a 35 años en condición de pobreza según sexo y grupo de edad por condición de asistencia a educación y empleo. 2020



Fuente: INEC, Enaho 2020.

“En el caso de acceso a salud aquí en Costa Rica, yo sé que el gobierno ampara a los niños, pero ya cuando se es joven no es así. Si uno no tiene un trabajo donde el patrono no lo asegure a uno el acceso a la salud es complicado”
(GF 6)

que se hace de población infantil o adulta mayor en detrimento de la atención a población joven.

En cuanto a las perspectivas sobre el enfoque de los servicios de salud, las opiniones coinciden en que en el sistema de salud en general prevalece un abordaje reactivo y no preventivo, pero que se intensifica en el caso de la población joven. Señalan vacíos en el desarrollo de iniciativas de prevención en temas como: salud mental, nutrición, actividad física o salud sexual y reproductiva. Consideran que la atención no está acorde con las características de su edad, donde en ocasiones se les infantiliza cuando les brindan información. Además, en 2 de los grupos de consulta se discutió sobre la desinformación en torno a los servicios de salud que tienen las y los jóvenes, donde no hay claridad sobre el tipo de servicios existentes o si pueden o no acceder a estos.

Un tercer punto relevante en materia de salud tiene que ver con la importancia que se asigna socialmente a algunos ámbitos de la salud. Aquí, otro aspecto generalizado en los grupos focales fue la discusión sobre la salud mental, pues consideran que no solo es un tema prioritario sino urgente de atender, en el cual se debe trabajar en varias líneas. Una es la necesidad de facilitar opciones de atención más expeditas y seguimiento frecuente para que la atención sea oportuna. Otra es la importancia de enfatizar en la prevención con iniciativas focalizadas en población joven que promuevan la salud mental. Por último, la pertinencia de trabajar en el imaginario colectivo para derribar mitos que inciden en que la salud mental haya quedado relegada en la lista de prioridades, pues trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés son minimizados y juzgados moralmente.

Sobre este tema, las cifras muestran que la salud mental, y específicamente la conducta suicida, cobra relevancia en la población joven. Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, las tasas de intento de suicidio en jóvenes aumentaron entre 2014-2018; el grupo de 15 a 19 años es el de mayor incidencia, seguido por jóvenes entre 20 y 24 años, como lo muestra el Cuadro 3.

En la misma línea, para el 2021 la CCSS reporta un aumento de 39% en atenciones por intento de suicidio de personas entre 18 y 34 años comparado con 2019 (Ministerio de Salud, 2019). Esto puede estar vinculado a situaciones de desempleo o cambios abruptos en la cotidianidad de las personas a raíz de las

Cuadro 3. Tasa de incidencia específica de intentos de suicidio según grupos de edad 2014-2018 (por 100 mil habitantes)

	2014	2015	2016	2017	2018
de 15 a 19 años	60,92	73,45	71,21	69,1	99,7
de 20 a 24 años	39,92	44,77	42,07	43,7	77,7
de 25 a 29 años	33,34	38,31	32,92	35,0	48,4
de 30 a 34 años	31,61	34,15	33,09	26,3	43,4

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2019.

**“Hay muy poca información sobre salud mental, sobre nutrición, etcétera, que hace que nosotros más bien tengamos cierta cantidad de problemas de salud que tal vez eran fáciles de prevenir, pero, por no tener esa información a la mano, ahora tenemos que reaccionar a tomar medicamentos”
(GF 2)**

restricciones impuestas en el país en aras de contener la pandemia por COVID 19, circunstancias identificadas como factores de riesgo para la conducta suicida. Al respecto, los datos del estudio liderado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED, 2021) identifican grupos particularmente afectados en este contexto de pandemia, en los cuales factores como nivel educativo, ocupación, sexo, entre otros, los hace propensos a mayor vulnerabilidad. Sin embargo, no se cuenta con datos a nivel nacional sobre sintomatología asociada con salud mental en la población previo a 2020, lo cual impide realizar comparaciones sobre la salud mental de esta población antes y durante la pandemia.

Otro de los ámbitos de la salud que salió a la luz en 5 de los grupos focales, fue la salud sexual y reproductiva. Según las percepciones de las y los jóvenes, si bien hay avances como mayor apertura para el uso de anticonceptivos o terapias hormonales para cambio de sexo, siguen existiendo vacíos de información sobre enfermedades de transmisión sexual, embarazos, acceso a procesos quirúrgicos para evitar embarazos en el caso de las mujeres, entre otros. Cabe mencionar que esta discusión estuvo liderada en su mayoría por mujeres, y la vincularon a factores sociales de corte estructural como el modelo de sociedad patriarcal, argumentaron que las mujeres enfrentan desigualdades respecto al control y decisión sobre sus cuerpos. Estas percepciones encuentran respaldo en la Encuesta de Mujer, niñez y adolescencia (EMNA) 2018 pues allí se indica que la proporción de mujeres que más reporta violencia obstétrica en partos en el periodo 2017-2018, son mujeres entre 18-34 años, que no cuentan con estudios formales o solo con educación secundaria, sin seguro social, con dificultades funcionales o discapacidad, dentro de los primeros dos quintiles de ingreso y residentes de las provincias de Cartago, Limón y de zonas urbanas.

En materia de la salud, se observa que las perspectivas brindadas por las y los jóvenes están en consonancia con las apreciaciones institucionales consultadas. Por un lado, el funcionariado consultado también resaltó las brechas territoriales, afirmó que para analizar la situación en salud se debe partir de un enfoque local, porque las realidades de los cantones son dispares entre sí. Además, en materia de salud mental los actores institucionales consultados muestran preocupación por la temática y se considera como prioritario abordarla. Desde la visión institucional el acceso al conocimiento e información sobre salud y los derechos de las personas jóvenes en esta materia también cobró relevancia en la discusión. Valoran que es una de las debilidades que presenta el sistema de salud y sobre la cual se debe trabajar.

Educación

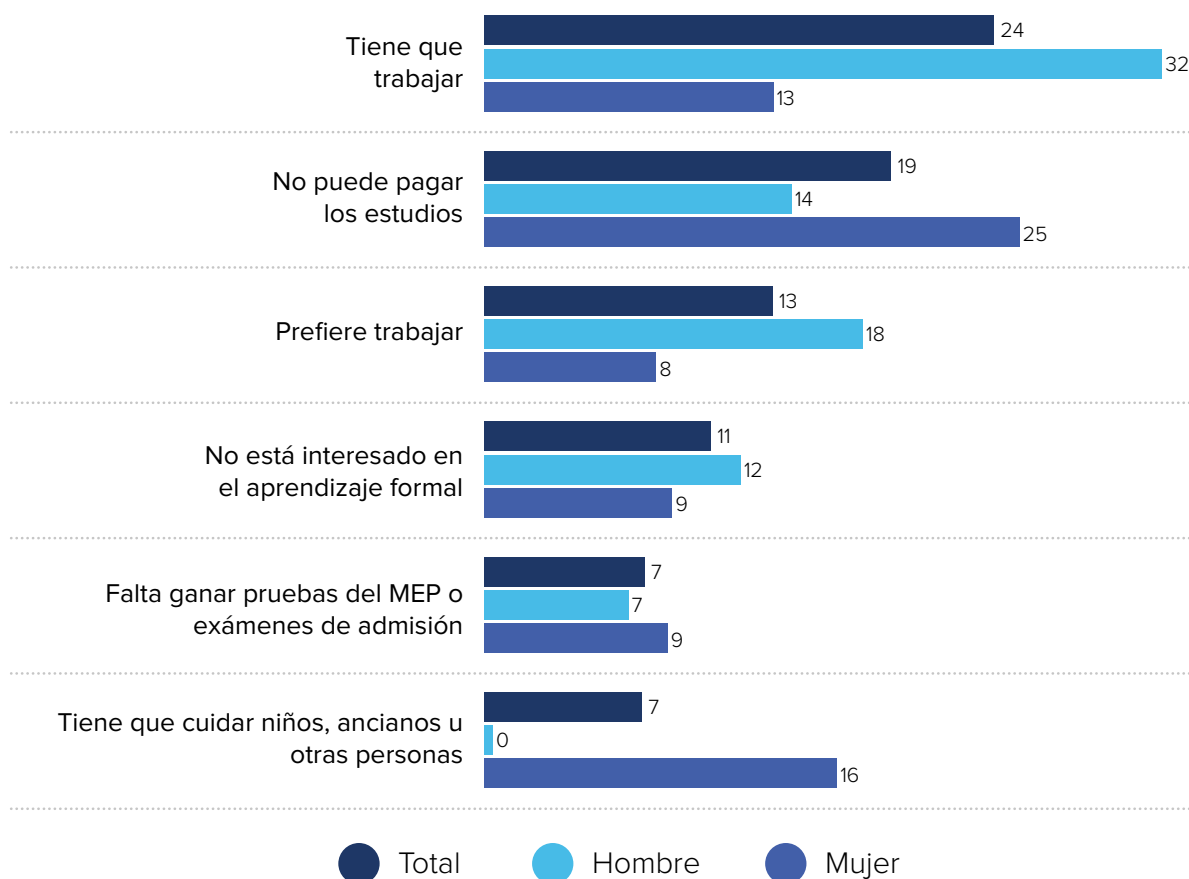
Para analizar el tema de educación se trazaron tres líneas que representan los nodos centrales de la discusión en los espacios de consulta: el acceso, la calidad y pertinencia de la educación; además, el tema de tecnología y conectividad.

Las personas jóvenes consultadas valoran de manera generalizada que en el país hay opciones educativas, pero a pesar que la educación es considerada universal, gratuita y obligatoria, existe un acceso diferenciado. Estas diferencias se vinculan con factores económicos, territoriales, de género y entre niveles educativos. Además, identifican grupos que consideran de mayor vulnerabilidad en cuanto a acceso, tales como las mujeres, las personas sexualmente diversas, las personas migrantes o la población joven privada de libertad.

A nivel de primaria y secundaria consideran que las brechas territoriales y económicas prevalecen, donde la posibilidad de estar en la educación formal está mediada por la facilidad o dificultad de acceder a los centros educativos en términos de distancia geográfica y por las condiciones económicas de las familias. Al respecto, los datos de la Enaho 2020 sobre asistencia a la educación formal indican que un 51% de jóvenes entre 18 y 24 años no asiste a centros educativos, este es el grupo que, según el sistema educativo, debe estar en un periodo de finalización de estudios secundarios y/o de ingreso a la educación superior. Esta cifra es levemente menor a la de la Enaho 2019, donde el 53% de jóvenes en este grupo etario no asistían a la educación formal.

Cuando se analizan las estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) para los años 2014, 2018, 2019, 2020 sobre motivos de no asistencia, los factores de tipo económico como “tiene que trabajar” o “no puede pagar los estudios” se ubican como la principal razón para estar fuera del sistema educativo. Cuando se desagregan los datos según sexo, sobresale la situación de las mujeres de 18 a 24 años, quienes indican que el principal motivo para no asistir a la educación formal es no contar con solvencia económica para pagar los estudios, seguido de razones vinculadas a tareas de cuidado. En otras palabras, para 16% de las mujeres las tareas de cuidado son una razón para no asistir a la educación formal, mientras que 0% de hombres dieron ese motivo (Enaho, 2020) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Porcentaje de población de 18 a 24 años por sexo según motivos de no asistencia a la educación formal. 2020



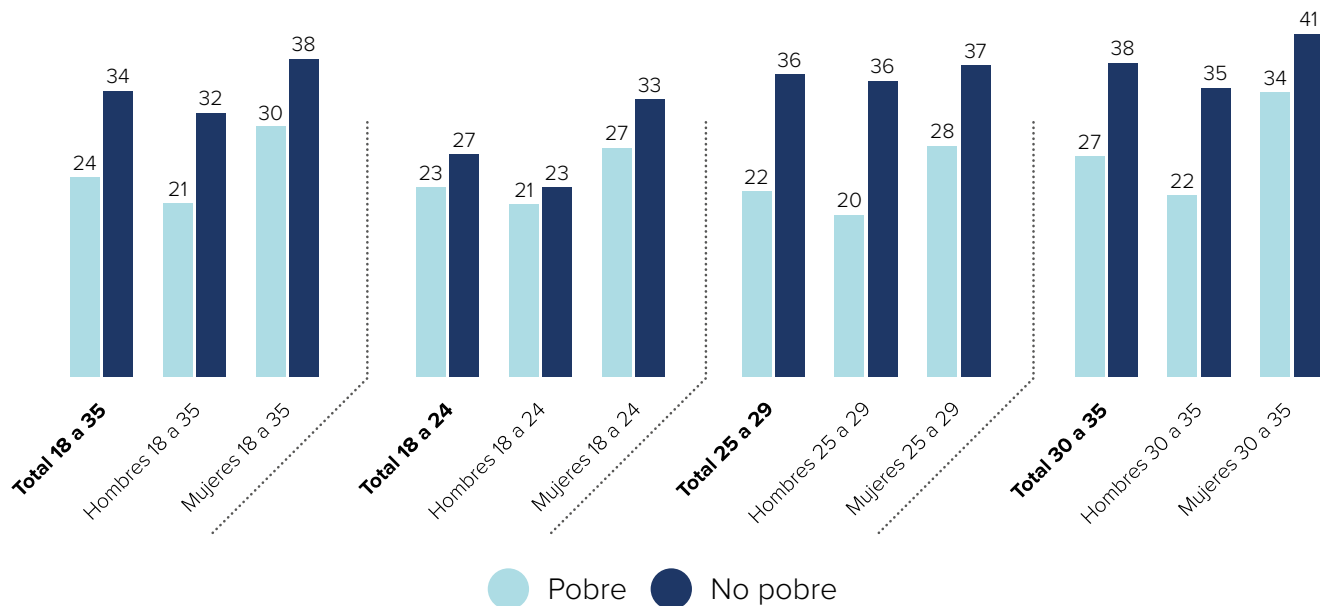
Fuente: INEC, Enaho 2020.

Con respecto a la educación universitaria, nuevamente, las desigualdades territoriales aparecen como un factor medular en las perspectivas de las y los jóvenes, en tanto consideran que la presencia de centros de enseñanza a nivel superior está concentrada en el centro del país. Sin embargo, en este punto, el tema de brechas de género cobra particular relevancia en las opiniones recabadas, pues afirman que las mujeres enfrentan desafíos para ingresar a espacios de educación superior/técnica, así como para mantenerse en el sistema, ya sea por labores de cuidado o porque en las dinámicas y relaciones sociales que se gestan en estos espacios experimentan tratos desiguales.

Otro de los grupos que las y los jóvenes valoran particularmente vulnerable en materia de acceso corresponde a las personas jóvenes mayores de 18 años insertas en el mercado laboral, formal o informal, que desean retomar o iniciar estudios a nivel universitario o en educación técnica. En 3 de los espacios de consulta, se mencionó que las opciones que se ofrecen en el país, por ejemplo, en universidades públicas o instituciones como el INA, no están acorde con las necesidades en cuanto a horarios y dedicación que pueden destinar estas personas a sus procesos formativos.

Esto se vincula con el tema que se abordó en uno de los grupos focales sobre las dificultades que presentan las mujeres para acceder a opciones de formación o capacitación a nivel técnico que ofertan instituciones públicas. Al respecto, consideran que las oportunidades están determinadas por ciertas características y condiciones de las mujeres que no todas comparten y por las cuales son excluidas del beneficio, esto se ejemplificó en el caso de espacios enfocados en mujeres madres y cómo el hecho de tener o no hijos(as) determina el acceso a becas u opciones de formación. Al respecto, los datos muestran que las y los jóvenes que no se ubican en pobreza acceden más a educación no formal (34%) versus aquellas que están en condición de pobreza (24%), tal como lo muestra el Gráfico 4.

Gráfico 4. Porcentaje de jóvenes en la fuerza de trabajo según sexo y grupos de edad por condición de pobreza que cuentan con educación no formal. 2020



Fuente: INEC, Enaho 2020.

“Se dice que la educación es universal y gratuita por decirlo así, bueno digamos “gratuita”, pero realmente el sistema no es gratuito, eso implica gastos enormes para personas de bajos recursos, entonces muchas personas o muchos padres de familia lo que optan es por sacar a sus hijos de la educación, no pueden costear eso”
(GF 2)

En la misma línea, la Enaho (2020) evidencia que el porcentaje de población joven que está dentro de la fuerza de trabajo y ha participado de algún espacio de formación facilitado por el INA es mayor en el caso de jóvenes que se encuentran en situación de pobreza. Estos datos invitan a reflexionar sobre los procesos de educación no formal brindados en el país, para valorar si están llegando a quienes más lo requieren y si realmente están siendo determinantes para que las y los jóvenes cuenten con herramientas para salir de la pobreza.

Otro de los elementos clave y que está estrechamente vinculado con las desigualdades territoriales es el acceso a tecnologías de la información y la conectividad. Las y los jóvenes afirman que, si bien previo a la pandemia por COVID 19 ya ese era un tema que requería fortalecerse en el sistema educativo, hoy es prioritario; en tanto, el acceso a la educación depende de las condiciones de conectividad; del uso y dominio de tecnologías de la información. Consideran que, de no abordarse con prontitud, las consecuencias de la brecha digital intensificarían las desigualdades.

Las estadísticas refuerzan esta argumentación, pues solo el 31% de las personas jóvenes en pobreza contaban con computadora portátil y el 5% con computadora de escritorio, cifras que se duplican para quienes no están en pobreza (Enaho, 2020). En el caso de internet la brecha se reduce, ya que el 86% de quienes están en condición de pobreza tienen acceso a internet, sin embargo, en este caso se presupone que el acceso aumenta porque se realiza mediante teléfonos celulares. Además, el acceso a internet y la tenencia de computadora portátil o de escritorio es más alta en personas que residen en zona urbana, lo cual reafirma la brecha territorial.

En los grupos focales también se discutió ampliamente sobre la calidad y pertinencia de la educación a nivel de secundaria y universidad. Respecto a la secundaria, señalaron que la educación está obsoleta con respecto a las realidades económicas del país, lo que dificulta el acceso al empleo. Ante este escenario, valoran necesario hacer ajustes al programa curricular y que éste les permita contar con herramientas básicas como Excel o el idioma inglés. Este desfase que identifican las y los jóvenes coincide con uno de los factores prioritarios que señaló la OCDE para Costa Rica en 2017. Allí se señala la necesidad de transformar el sistema educativo a nivel diversificado para que se vincule con posibilidades de acceso a capacitación, estudios superiores o al mercado laboral.

Adicionalmente, cuando se aborda el tema de calidad de la educación, las y los jóvenes consultados resaltan la brecha entre lo público y lo privado a nivel de primaria y secundaria. En el caso de la educación superior es distinto, pues lo que se problematiza es la pertinencia de las carreras que se ofrecen en relación con las dinámicas económicas de las regiones del país. En línea con esto, los datos del Informe Estado de la Educación 2021 indican que, en las regiones de la periferia del país, la titulación universitaria tanto pública como privada no garantiza las mismas condiciones de empleo que en la Región Central. Por ejemplo, en regiones como la Chorotega (11,1%) y la Pacífico Central (7,3%) el porcentaje de desempleo en personas graduadas universitarias duplica la cifra de la región Central (4,8%).

Los desafíos mencionados por las personas jóvenes coinciden con las perspectivas institucionales, quienes problematizan el acceso a oportunidades de formación tras finalizar la educación secundaria, así como la calidad de los ciclos básicos

“Lo otro que habían comentado es la parte de Excel, Power Point y todas estas habilidades también lo piden en el trabajo y no se los dan en la escuela o en el colegio. Uno medio aprende ahí travesando, pero no sale con un certificado donde de verdad diga yo sé Excel”

(GF 6)

de la educación formal, lo que constituye una barrera para incorporarse a la universidad o al mercado laboral. También resaltan las desigualdades basadas en género, con énfasis en las labores de cuidado que recaen mayoritariamente en las mujeres. Por ende, señalan como tarea pendiente a nivel país, el ofrecer opciones para que las mujeres puedan continuar con el proceso educativo en realidades donde la atención de hijos, hijas o familiares menores de edad se establece como prioritaria. De igual manera se discutió sobre el acceso a internet y su carácter indispensable para asegurar educación de calidad en la primaria y secundaria. En este punto resaltan que hay diferencia en el acceso, la cual no solamente pasa por lo económico sino también por la infraestructura para la conectividad.

En síntesis, se puede observar que en materia de seguridad social las perspectivas de las y los jóvenes expresan sentimientos de vulnerabilidad frente al quehacer de las instituciones públicas y sus decisiones. Las brechas son el común denominador cuando se les consulta sobre salud y educación. Brechas que corresponden a procesos históricos y que, ante situaciones coyunturales como la pandemia, cobran visibilidad y profundidad. En materia educativa, los efectos que hoy se hacen visibles tendrán impactos en las trayectorias educativas y laborales de estas generaciones.

No es una, sino muchas juventudes: la persistencia de brechas territoriales y de género como reto para la inclusión de las poblaciones jóvenes

Los resultados del estudio muestran un escenario retador en términos de inclusión de las juventudes desde una perspectiva multidimensional e interseccional, así como de su incidencia desde espacios políticos. En otras palabras, se considera que cualquier abordaje que se realice para la inclusión de las personas jóvenes debe partir de una premisa que reconozca la heterogeneidad a lo interno de aquello que se suele englobar como juventud, ya que, se trata de una multiplicidad de juventudes ante las cuales se debe reconocer las especificidades para (re)pensar las políticas públicas y el camino a seguir sin dejar a nadie atrás, al considerar los procesos electorales en un futuro cercano.

Este carácter heterogéneo de las juventudes queda claro en el estudio Cultura política de las personas jóvenes frente al proceso electoral costarricense de 2022: orientaciones hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás, en el cual, al analizar temas como salud y educación, sobresalen las brechas territoriales y de género como las principales barreras que marcan profundas diferencias entre la población joven, pero también la situación socioeconómica y la edad marcan distinción. En otras palabras, al revisar las perspectivas de las personas consultadas y los datos estadísticos oficiales, se identificó una suerte de carrera de obstáculos, donde una vez vencida una primera barrera, se encuentra una nueva y así consecutivamente. Además, se encontraron expresiones diferenciadas según se asocian las brechas a temas como salud y educación, tal como se sintetiza en la Tabla 1.

Tabla 1. Tipos de brechas y sus manifestaciones en población joven según eje temático

Eje temático	Tipos de brechas			
	Territorial	Género	Edad	Condición socioeconómica
Salud	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad y diversidad de servicios de atención. • Acceso a centros de atención según ubicación geográfica. • Infraestructura de los centros de salud según zona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Salud sexual y reproductiva cargada de mitos y desinformación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimización de la relevancia de atención de salud en personas jóvenes. • Priorización de otros grupos poblacionales (niñez). • Desprotección de la seguridad social en la transición de la infancia a la adultez. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diferencias de acceso y calidad entre el sistema de salud público y privado.
Educación	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad según zona del país. • Acceso a centros educativos. • Infraestructura de conectividad. • Pertinencia según tipo de actividad económica de la zona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de carreras (espacios masculinizados). • Tareas de cuidado dificultan continuidad de estudios en mujeres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevas responsabilidades de juventud limitan continuidad en estudios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a educación privada para algunos grupos sociales brinda niveles de calidad diferentes (idiomas). • Acceso a dispositivos tecnológicos. • Paralelismo entre trabajo y estudio o solo trabajo para aportar económicamente a la familia.

Este escenario deja claro que las desigualdades no trastocan de igual forma la vida de las personas. Más allá de una lógica basada en la meritocracia y la igualdad de oportunidades, estos hallazgos muestran que no es suficiente con ofrecer “las mismas oportunidades” para todas las personas jóvenes. Por el contrario, se debe partir de la multiplicidad de desigualdades en las que están inmersas las juventudes y ofrecer respuestas desde esa perspectiva. Las brechas sobre las que reflexionaron las personas consultadas y que respaldan los datos estadísticos, evidencian un debilitamiento en la capacidad del Estado para incluir socialmente a estos grupos.

En este contexto, y de cara a las próximas elecciones nacionales, resulta necesario analizar el papel de la juventud como actor clave para la incidencia política en esta materia. De este modo, es indispensable abrir espacios de discusión que fomenten la participación democrática de la población joven, en los que se escuchen sus voces y se actúe en consonancia. Si bien a nivel institucional se ha

procurado la apertura de estos encuentros (Grupo focal instituciones), en la práctica las personas jóvenes perciben limitantes para ser escuchadas y para actuar.

Para concluir, este estudio pone en evidencia el sentimiento de exclusión de los espacios de toma de decisiones que sufren las personas jóvenes, de las limitadas oportunidades para expresar sus opiniones y emociones, y de la lógica adulto-centrista que, consideran, impera en el diseño e implementación de políticas públicas. Por dicha razón, las bases del camino que debe construirse serán las del diálogo informado, diverso e inclusivo. Los espacios deben adaptarse a la multiplicidad de las juventudes que han sido señaladas, no es un mismo canal, sino varias vías por las cuales debe incorporárseles efectivamente, de modo que su voz tenga alcance y se materialice en acciones que las incluya, siempre en un marco democrático y sin dejar a nadie atrás.



Recomendaciones

La evidencia proveniente de datos estadísticos y de la consulta realizada a personas jóvenes y representantes de instituciones, llama la atención sobre los desafíos que persisten en materia de seguridad social, educación, desarrollo económico y soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo si se considera la persistencia de brechas territoriales, de género, por condiciones socioeconómicas y por edad que permean dichos ámbitos en el contexto actual. Ahora bien, más allá de reparar en los vacíos, el objetivo con este estudio es generar insumos sobre dichas temáticas que permitan mejorar el debate político y promover el diálogo democrático, informado, inclusivo, con información disponible y asequible, de las personas jóvenes, frente al proceso electoral costarricense de 2022, que tenga como centro la reflexión hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

Un marco posible para analizar estos retos y plantear rutas de abordaje es a partir de la relectura de la información de cara a la **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, específicamente a partir de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**. En particular, para el eje de seguridad social y educación este estudio resalta desafíos en los siguientes objetivos: **ODS 1** (“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”), **ODS 3** (“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”), **ODS 4** (“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”), **ODS 5** (“Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”), **ODS 16** (“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”) y **ODS 17** (“Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”), de modo que las recomendaciones se plantean alineadas con dichos objetivos y sobre la base de la evidencia recolectada según el eje temático mencionado.

Seguridad social y educación



El **ODS 1** plantea “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y en particular establece la necesidad de poner en práctica medidas de protección social (las cuales contemplan, entre otros aspectos, sistemas de seguridad social) que alcancen a toda la población y en particular aquella en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por su parte, el **ODS 3** establece la necesidad de “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”. Para alcanzar estos objetivos, es necesario un **abordaje integral** que contemple la **salud mental**, así como la **salud sexual y reproductiva** de las personas jóvenes. Esto requiere dotar de **información** a la población entre 18 y 35 años sobre sus derechos y opciones de atención, pero también extender el mensaje al personal involucrado en la atención en salud y a la población en general, con el fin de derribar mitos que persisten en torno al abordaje de salud mental y de las **brechas de género** en la atención de la salud sexual, en particular para las mujeres. La información debe dar cuenta de la importancia de la **prevención** y de la relevancia de la atención en salud aun cuando las personas sean jóvenes. Es decir, se trata de posicionar el tema de salud física y mental como eje central del bienestar y apostar por abordajes preventivos que reduzcan la necesidad de atención reactiva.



El **ODS 4** plantea como fin el “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de **calidad** y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Los hallazgos evidencian que la universalización de la educación todavía no se alcanza y que las diferencias en la calidad varían según **territorio**, o sistema **público o privado**. Estas diferencias profundizan las desigualdades y constituyen un obstáculo para la inserción laboral. En este sentido, a nivel de políticas educativas es necesario repensar y **actualizar el currículo**, para que responda a las **necesidades actuales** que exige el **mercado laboral**. Es imperante fortalecer el manejo de **idiomas** en los centros educativos públicos para minimizar la brecha respecto a la educación privada. Asimismo, la **contextualización** de los programas educativos de cara a las demandas locales es clave para facilitar la inserción laboral de las personas jóvenes en sus contextos. También, la **conectividad** y la **alfabetización tecnológica** son necesidades que han sobresalido en la pandemia, por lo que se deben enmarcar las acciones en esta línea para disminuir lo que ya se prevé como un desfase educativo en el corto y mediano plazo.



Ejes transversales



En términos de recomendaciones, hay tres ejes transversales que interesa retomar. Por un lado, el **ODS 5** plantea como meta “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Esta es una brecha observada con mucha fuerza a nivel de salud, educación y empleo. Las mujeres se encuentran en **desventaja** en los espacios **educativos**, en la atención en **salud**, en las posibilidades de insertarse al **mercado laboral** y, una vez insertas, enfrentan nuevas brechas. Se reconocen avances, pero la diferencia es clara, desde lo que se vive y observa, la brecha es un elemento omnipresente. No se ha alcanzado la igualdad de género, aunque hay un nivel de **empoderamiento** que se debe aprovechar. Sin embargo, la ruta no es desde lo individual, la responsabilidad no debe recaer en las barreras que cada mujer pueda saltar, sino en la versión **colectiva** que inicia desde el cuestionamiento del **sistema patriarcal** que prevalece. En este sentido las acciones posibles son múltiples: abrir espacios educativos que abandonen la



masculinización por sectores de especialización, garantizar el cumplimiento de la **legislación laboral**, quebrar los **techos de cristal**, generar políticas inclusivas que reconozcan la **multiplicidad de desigualdades** que enfrentan las mujeres y que por tanto respondan a necesidades particulares. Además, el cuestionamiento del rol de género que demanda horas dispares de **cuido** es fundamental para la sostenibilidad de las mujeres en los sistemas educativos y en los espacios laborales.

Por otro lado, el **ODS 16** plantea “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” y, de forma específica, establece como meta 16.7 “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”. En este sentido, resulta crucial que la **toma de decisiones** políticas involucre de manera efectiva la **participación de las personas jóvenes**. Si bien se reconoce que se han hecho esfuerzos por generar espacios participativos para dar lugar a las personas jóvenes, los hallazgos evidencian que hay pendientes en esta materia, pues las personas consultadas señalan desconocer tales espacios, tener obstáculos para acceder a la toma de decisiones o que su participación para abonar a la discusión no se ve reflejada en acciones concretas. Este aspecto adquiere mayor relevancia al considerar que la población joven tiene un peso relevante en los **procesos electorales** costarricenses. De manera concreta, según datos del TSE el padrón electoral para los comicios de 2022 está compuesto por una proporción de personas jóvenes de casi 4 de cada 10 posibles votantes, lo que les coloca en un rol estratégico en la agenda política y en la elección presidencial y de diputaciones.

Por esta razón, resulta clave la **identificación de los desafíos** a los que se ve enfrentada la población para su **inclusión social** mediante mecanismos de participación efectiva. Además, es necesario que dichos mecanismos sean **divulgados** de tal manera que la información llegue a las personas jóvenes y participen en la construcción de soluciones colectivas y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el cual tome en consideración que hay procesos de **desafección y desconfianza** de las personas jóvenes en el sistema político.



Por último, como elemento transversal se encuentra la **comunicación** y en este sentido cobra relevancia el **ODS 17** relativo al establecimiento de “alianzas para lograr los objetivos”. No se niega que haya información, pero la **calidad** y los **medios de divulgación** no se adaptan de forma precisa a lo que consume la población joven en la actualidad. Pensar el proceso electoral que se aproxima exige buscar medios de comunicación que lleven la información a la población joven y que posicionen en la agenda **temas de relevancia nacional** como los tratados aquí y en los cuales diversas instituciones están involucradas, de modo que las alianzas constituyen un elemento fundamental para transmitir el quehacer institucional y el apoyo que se le pueda brindar a las juventudes desde la especificidad de cada una, pero también a partir de la articulación entre estas. Será necesario que la información llegue por **vías llamativas** a la población joven, que incite al consumo de datos confiables y que reposicione la relevancia de su involucramiento en estos temas. También los espacios de **escucha y participación** son clave. Más allá de establecer en protocolos y políticas la importancia de la participación, se deben llevar a cabo acciones que concreten tal participación. En los grupos focales se observó disposición, pero también se captó el vacío de conocimiento respecto a las **posibilidades de incidencia**. Hay que dar un paso más allá, para que el involucramiento sea efectivo, sin dejar a nadie atrás.

En síntesis, estas recomendaciones ofrecen elementos estratégicos clave que se deben abordar con urgencia desde la institucionalidad y otros espacios de incidencia. Las acciones concretas deben partir de la evidencia generada a través de investigaciones y deben adaptarse a las realidades propias de los contextos. En este sentido, uno de los retos que sobresale es la posibilidad de acompañar las políticas, programas e intervenciones específicas con procesos de monitoreo y evaluación, de modo que se sistematicen las experiencias y se puedan recuperar lecciones aprendidas para compartir a nivel regional, nacionales e internacional.



Referencias

- Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud (2018). *Estadísticas sobre incidencia de intento suicida*. San José.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Varios años). *Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)*. San José.
- Programa Estado de la Nación (2021). *Capítulo 6. Educación superior en Costa Rica*. Octavo Estado de la Educación. San José: PEN.
- Treminio, I. y Pignataro, A. (2019). *El mito del voto joven: valores, religión y comportamiento electoral en Costa Rica*. En: Rojas-Bolaños, M. y Treminio, I. (Eds.) (2019). *Tiempos de travesía. Análisis de las elecciones de 2018 en Costa Rica*. San José: FLACSO Costa Rica.
- Universidad Estatal a Distancias, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de seguro Social. (2021). *Salud mental y relaciones con el entorno en tiempos de COVID-19*. San José. <https://investiga.uned.ac.cr/wp-content/uploads/2021/01/INFORME-Salud-mental-en-tiempos-de-COVID-19.pdf>



FLACSO
COSTA RICA



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa Rica,
Teléfono: (506) 22961544
<http://www.pnud.or.cr> -Email: registry@undp.org

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Trabajamos con nuestra extensa red de expertos y aliados en 170 países para ayudar a las naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta. Pueden obtener más información en undp.org o seguirnos en @PNUD.

2021